

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por NOHEMY DEL SOCORRO CUERVO CATAÑO en contra de BRILLADORA ESMERALDA LTDA (en liquidación judicial) y el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Radicado 05088-31-05-001-2016-00399-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se declare la existencia de dos contratos de trabajo por obra o labor, en los que Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación judicial) fungió como empleadora; el primero ejecutado entre el 2 de mayo y el 7 de diciembre, ambas fechas de 2012; y el segundo desde el 14 de enero de 2013 y hasta el 11 de mayo del mismo año. Y que, al prestar el servicio de aseo, como auxiliar de oficios varios, en una institución educativa del orden departamental, el Departamento de Antioquia es deudor solidario. En consecuencia, se condene a las demandadas a pagarle: salarios insolutos, auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, prima de servicios, compensación de vacaciones, indemnización por despido sin justa causa, subsidio de transporte, las sanciones moratorias de que tratan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, la indexación y las costas (fls 3-5 acápite de pretensiones y su reforma en los folios 187-195).

Sustentó tales pedimentos relatando que celebró los contratos referidos con Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación judicial). Las relaciones laborales

se desarrollaron en los extremos temporales resaltados. El 7 de diciembre de 2012 y el 11 de mayo de 2013, respectivamente, le fueron terminados los contratos sin justificación legal. La labor que desempeñó fue en el servicio de aseo de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta del Municipio de Copacabana (Ant), centro que depende del Departamento de Antioquia, a cuyo cargo y responsabilidad compete el normal funcionamiento de la labor educativa, lo que incluye el aseo de los planteles escolares. Su salario fue equivalente al SMLMV. Su empleadora no le pagó las obligaciones sociales reclamadas, y le quedó adeudando los salarios del 1º al 6 de febrero de 2013, y del 1º al 11 de mayo de 2013 (fls 6 y 190).

El Departamento de Antioquia, comentó que no fungió como empleador de la activa y por ello no le constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar mencionadas en el escrito inicial. Aclaró que el servicio de aseo en las instituciones educativas, lo prestó un tercero a través de los *contratos de servicios de aseo y servicios generales* suscritos con su Secretaría de Educación (contratos 2012-SS-15-0047 y 2013-SS-15-0025). Dijo en cuanto a la responsabilidad que desea endilgársele, que el ente territorial funge como un mero administrador de los recursos que gira el Ministerio de Educación, según lo prevé el artículo 17 de la Ley 715 de 2001. De esa manera se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de integración del Litis necesario con la Nación-Ministerio de Educación, ineptitud sustancial de la demanda, inexistencia de la obligación y prescripción (fls 79-91).

El curador *ad-litem* de BRILLADORA ESMERALDA LTDA (en liquidación judicial), en término generales comentó que no le constan los hechos de la demanda. Propuso las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación contractual de tipo laboral, inexistencia de la obligación, y cobro de lo no debido (fls 179-184).

En sentencia del 10 de julio de 2019, el Juzgado Laboral del Circuito de Bello (Antioquia), declaró que entre la accionante y Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación judicial), existieron dos contratos de trabajo por obra o labor determinada: i) del 2 de mayo al 7 de diciembre de 2012; y ii) del 14 de enero

al 11 de mayo de 2013. Y que el Departamento de Antioquia es solidariamente responsable de las obligaciones a cargo del empleador, porque la labor ejercida por la trabajadora no fue extraña al objeto misional de la entidad territorial. En consecuencia, condenó a las convocadas a juicio a pagar a la actora, solo por lo generado en el segundo contrato: \$294.750 por indemnización por despido injusto; \$542.419 por cesantía, intereses, prima de servicios y vacaciones; \$334.050 por 17 días de salario; \$274.950 por auxilio de transporte; \$5.560.950 por la sanción moratoria del artículo 65 del CST, calculada desde la terminación del contrato hasta la apertura del proceso de liquidación obligatoria de Brilladora Esmeralda LTDA, ordenada por la Superintendencia de Sociedades mediante auto 400-002764 del 24 de febrero de 2014; y la indexación -a liquidar a partir del 25 de febrero de 2014 y hasta el momento en que se satisfaga la totalidad de la obligación-. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción en lo que toca con las obligaciones derivadas del primer contrato por no haber sido reclamadas en tiempo al empleador, y absolvió de las demás pretensiones. Costas en primera instancia a cargo de las codemandadas, fijó como agencias en derecho \$550.000 (fl 222 archivo juzgamiento Min 06:47 en adelante).

La demandante aspira a que se revoque y modifique tal determinación en varios aspectos: 1) Sobre la prescripción declarada del primer contrato, porque al haber ingresado la Brilladora Esmeralda LTDA a liquidación en 2014, desde ese momento estaba suspendido el fenómeno extintivo frente a las obligaciones demandadas, por así disponerlo el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, por lo que ha debido ordenarse el pago de las obligaciones sociales causadas en este vínculo. 2) Respecto de la sanción moratoria limitada a la fecha en que se ordenó la liquidación de la empresa, en su sentir, este guarismo debe ordenarse sin ese obstáculo, dado que en el proceso se acreditó con suficiencia la mala fe tanto del empleador como del deudor solidario, *que no era cualquiera*, sino de una entidad territorial que debió haber vigilado el cumplimiento de los contratos que suscribió con la codemandada. Y 3) En lo que tiene que ver con la fijación de las agencias en derecho, dado que desde su perspectiva el monto fijado debió ser mayor (fl 222 archivo juzgamiento Min 40:10).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Conforme a lo que es materia de apelación y las decisiones del *a quo* que deben ser revisadas en el grado jurisdiccional de consulta a surtir en favor del ente territorial (acatando el mandato del artículo 69 de la Legislación Adjetiva Laboral), corresponde a la Sala determinar cómo problemas jurídicos: si entre la demandante y Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación), existieron -uno o varios- contratos de trabajo por obra o labor determinada, sus extremos temporales, si ocurrió un despido unilateral y es viable la indemnización por despido sin justa causa; si proceden o no las obligaciones sociales reclamadas -lo que dependerá del acaecimiento o no de la prescripción. En ese sentido, se aclarará, cómo opera ese fenómeno y su interrupción o suspensión-; y si es viable o no la sanción prevista en el artículo 65 del CST. Igualmente es parte de los asuntos a resolver, si el Departamento de Antioquia es responsable solidario de las obligaciones dejadas de cancelar en atención a lo previsto en el artículo 34 del CST, verificándose si la liquidación que hizo el primer juez, se encuentra o no ajustada a derecho.

Aunque en principio la demandante pretendió la declaratoria de un contrato de trabajo a término indefinido, lo cierto es que ese aparte de la demanda fue reformado a través del memorial del folio 187, actuación admitida en el proveído del 19 de octubre de 2017 (fl 198). Ergo, la pretensión declarativa en comento, se circunscribió a la existencia de dos contratos de trabajo, en la modalidad de obra o labor determinada, en los que actuó como empleadora -Brilladora Esmeralda LTDA en liquidación-, el primero ejecutado entre el 2 de mayo y el 7 de diciembre, ambas fechas de 2012; y el segundo desde el 14 de enero de 2013 y hasta el 11 de mayo del mismo año. Es decir que: i) la activa no controvierte la modalidad contractual de obra o labor, ni quién fungió como su subordinante, aceptando que fue la sociedad en liquidación la que ocupó ese lugar en el vínculo laboral, y ii) que la responsabilidad a cuya

asignación se aspira respecto del departamento, es en calidad de beneficiario del servicio, es decir, como solidario, por lo previsto en el artículo 34 del CST, por cierto, la argumentación visible en el hecho tercero del escrito inicial, gravita en que las labores de aseo ejecutadas en las instituciones educativas que dependen del departamento, no son ajenas al *objeto misional* del ente gubernamental (fl 6).

Para dilucidar si lo que se afirma corresponde a la realidad, es menester recordar que, en los contratos de trabajo por obra o labor determinada, debe pactarse su duración atada a una condición futura e incierta pero si determinable¹ (sin exigencias de solemnidad, puede ser verbal o escrito), pues de ello depende lo finito de su existencia, y la posibilidad de su terminación legal por el acaecimiento de la condición, lo que también puede inferirse de la naturaleza de la actividad que ejecute el trabajador (numeral 1º del artículo 47 del CST, y Sentencia CSJ SL2600-2018). Significa lo dicho que, la subsistencia del contrato va en relación directa con el tiempo que dure la confección de la obra contratada². Cuando la duración no es determinable, lógicamente el convenio entre las partes se entenderá comprendido en la modalidad residual a término indefinido.

En el *sub examine*, la actora adujo haber asumido este tipo de contrato con su empleadora, sin embargo, si bien se aprecia en el proceso que aquella prestó personalmente el servicio de aseo bajo la subordinación de la sociedad señalada como empleadora (según las diversas comunicaciones que le remitía la Brilladora fls 18, 19, 74, 76, 196 y 197), no sucede lo mismo con la delimitación temporal del servicio convenido, esta no puede determinarse, ni se aportaron medios de convicción para inferirla. Las pruebas aluden a la denominación de obra o labor, pero en parte alguna informan sobre cómo los contratantes fijaron las características temporales de la labor.

Los testigos, Camilo Alberto Arenas (minuto 10:17), y Miguel Ángel Carvajal Vallejo (minuto 55:24), quienes también hicieron parte del grupo de

¹ Comentarios al Régimen Laboral Colombiano, Ediciones Rosaristas 1984. German G. Valdés Sánchez, página 95.

² Derecho del Trabajo. Principios y Relaciones Individuales, Editorial Temis 1981. Álvaro García Solano, página 206.

trabajadores conformado por la Brilladora para la labor de aseo en las instituciones educativas, explicaron que todos eran vinculados por contratos de obra o labor, el primero se desarrolló durante 2012, terminándose a principios de diciembre de ese año; y el segundo ejecutado durante 2013. Explicaron que a la terminación de los contratos no les eran canceladas la totalidad de las prestaciones sociales, y que, respecto de los salarios, estos sí fueron pagados, aunque tardíamente, exceptuando la remuneración de 11 días de mayo de 2013 y 6 días de febrero de ese mismo año. Los declarantes conocen el contexto en el que aquella fue vinculada para el efecto, debido a que todos eran citados para la firma de los contratos en las oficinas de la demandada en el centro de Medellín, y ambos laboran en servicios generales en la misma institución donde trabajó la actora, el colegio José Miguel de Restrepo y Puerta. Afirmaron que no saben exactamente los valores que fueron cancelados o no a la ciudadana, pero que en el contrato se pactó la procedibilidad del auxilio de transporte. Y que luego de finalizado el contrato de algunos de sus compañeros, otros continuaban trabajando.

Esas declaraciones, como se advirtió, no dejan ver la temporalidad del servicio, al contrario, ponen al descubierto la naturaleza permanente de la actividad, pues se prestaba el servicio de aseo de las instalaciones de las instituciones educativas, cuyo suministro es una obligación indeleble que corresponde al Departamento de Antioquia, atendiendo a que se trataba de planteles no certificados, luego, en atención a lo previsto en los artículos 298 de la Constitución Política, y 6º de la Ley 715 de 2001, según los cuales compete y es responsabilidad de las entidades territoriales, como la pasiva, la promoción del desarrollo social y educativo en su jurisdicción, y organizar la prestación y administración del servicio educativo, debe entenderse como parte de su responsabilidad, la provisión del aseo en las instalaciones donde dicho servicio sea prestado, pues de su inclusión deriva la eficacia del primero, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional (sentencias T-516 de 1996 y T-273 de 2014).

Ese motivo, justifica que fuera la Secretaría de Educación del ente convocado, la que celebró los acuerdos 2012SS150047 y 2013-SS-150025 (fls 26-34 y 95-102), en los que se contrató con Brilladora Esmeralda LTDA *“la prestación*

del servicio de aseo, mantenimiento y servicios generales para todos los tipos de Instituciones y Ciudades Educativas Oficiales de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones”.

En estos convenios, se especificó una duración en la cláusula segunda y tercera de cada uno, señalándose que su vigencia desaparecería, el primero, el 31 de diciembre de 2012 o cuando se agotare el presupuesto; y el segundo, al finalizar el tercer mes desde la *autorización del inicio de labores*. Estipulaciones de las cuales no puede desprenderse la temporalidad del contrato suscrito entre Brilladora y la actora, porque no obra prueba de que su vigencia se hubiere atado a los convenios interinstitucionales, y en todo caso, se itera, la naturaleza de la labor no permitía la coexistencia de esa modalidad contractual.

Por lo visto, la conclusión a la que debía llegarse era que se trató de dos contratos a término indefinido. Empero, el *a quo*, declaró su existencia en la modalidad por obra o labor determinada, el primero entre el 2 de mayo y 7 de diciembre de 2012; y el segundo vigente desde el 14 de enero y hasta el 11 de mayo, ambas fechas de 2013, extremos que se comprueban entre otras cosas, con el certificado de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, que presencié de cerca el trabajo de la pretensora, y dio fe de que aquella se desempeñó como aseadora del colegio en tales fechas (fl 20). Aparte de la decisión que no fue recurrido por el polo activo, por lo que ha de mantenerse incólume, adicional a que este aspecto es estudiado en el grado de consulta en favor del departamento, y modificarlo implicaría una desmejora de las condiciones jurídico procesales de la parte en favor de la que se adelanta el grado jurisdiccional.

Probada como queda la relación laboral, como fue declarada en el primer grado, visto que la empleadora no acreditó el pago de lo reclamado, proceden las pretensiones, incluyendo lo relativo al auxilio de transporte, institucionalizado a través de la Ley 15 de 1959, en la medida que la remuneración percibida equivale al SMLMV, y no se probaron las circunstancias en las que ha reparado la doctrina de esta especialidad para su improcedencia, tales como: el trabajador reside en su lugar de trabajo, o el empresario suministra el transporte.

Estas prestaciones, únicamente respecto de las obligaciones sociales causadas durante la vigencia del segundo contrato declarado por el juzgado de conocimiento, dado que las originadas en el primero fueron afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción, puesto que se hicieron exigibles el 7 de diciembre de 2012, y ninguna reclamación de ellas se elevó a Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación), durante los tres años siguientes a la data referida, esto es, hasta antes del 7 de diciembre de 2015 (art 151 CPTSS y 488 del CST), la solicitud de lo debido al empleador, fue presentada el 11 de abril de 2016 (fl 23), después de transcurrido el plazo trienal, al igual que la demanda radicada el 5 de mayo de 2016 (fl 2). No es plausible tener en cuenta para efectos de la interrupción de la prescripción, la reclamación del 18 de noviembre de 2013 visible en el folio 21, ya que, esta se presentó al Departamento de Antioquia, y como no se argumentó que tal hubiese sido el empleador, no se configura el supuesto de hecho de las disposiciones citadas, que prevén la interrupción del fenómeno extintivo, por una sola vez, *con el simple reclamo escrito recibido por el empleador*, es decir, el que se presentare -en este caso- a Brilladora Esmeralda LTDA; por tanto, en el fallo gravado no medió el error de hecho resaltado en la censura, según la cual, por ser solidariamente responsables las codemandadas las actuaciones adelantadas frente a la una, tienen efectos frente a la otra, porque este tipo de solidaridad debía declararse judicialmente, lo que tan solo ocurre con esta decisión, lo que quiere decir que la aplicabilidad de lo normado en los artículos 1568 del Código Civil y siguientes, tendrá efectividad una vez ejecutoriada la sentencia y no antes.

Se intenta en esta ocasión, que se comprenda interrumpida la prescripción desde 2014, porque allí se inició el proceso liquidatorio, lo que generó el efecto previsto en el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006. Esa disposición, al igual que el artículo 72 ibídem, consagra lo siguiente:

“...Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:

8. La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de las acciones respecto de las obligaciones que contra el

*deudor o contra sus codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, **estuvieren perfeccionadas o sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial...***”.

Luego de una lectura detenida de la norma en comento, se deriva que la intelección propuesta por la demandante, no es conteste con el espíritu de la norma, dado que cuando se refiere a las obligaciones perfeccionadas o que sean exigibles, impone un criterio objetivo para determinar la interrupción de la prescripción, y es que la obligación ya hubiese sido reconocida por el deudor, bien a través de un título ejecutivo o impuesta a través de una sentencia, lo que debe ocurrir antes de la liquidación. Y en el *sub lite*, ninguna de esas condiciones ocurre, las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, estaban siendo discutidas en este escenario, por ende, no se hicieron exigibles antes de la apertura del proceso de liquidación de Brilladora Esmeralda LTDA, y en ese sentido estaban sujetas a la extinción por vía de la excepción, como acertadamente lo vislumbró el *a quo*.

Revisada la liquidación de primer nivel frente a las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte y los 17 días de salario debido (febrero y mayo de 2013), se encuentra ajustada a derecho, pues se calculó con base en la remuneración mínima de 2013, y se atendieron los días efectivamente laborados de ese año, por lo que se confirmará su imposición.

En cuanto al despido, se tiene que el *a quo* declaró que el contrato finalizó el 11 de mayo de 2013, y como la pasiva no demostró una causal legal de su extinción, debía reconocer la indemnización por despido sin justa causa, la que fue calculada con 15 días de salario, lo que para la Sala es razonable, debido a que no se demostró que la terminación hubiere ocurrido por la finalización de la obra o labor, y según el inciso 3º del artículo 64 del CST, este guarismo no puede ser inferior en ningún caso, al monto otorgado por el juzgado, lo que se confirmará.

En lo que toca con la sanción moratoria impuesta, prevista en el artículo 65 del CST, basta decir que de ningún medio se desprenden actuaciones de la empleadora Brilladora Esmeralda LTDA (en liquidación), que justifiquen la ausencia de pago de las prestaciones sociales, por lo tanto es jurídicamente correcto su imposición, al igual que su limitación hasta la fecha en que se dio apertura al proceso de liquidación de la sociedad, que fue posterior a la data en que finalizó el último contrato de trabajo, esto es, el 24 de febrero de 2014 (fl 12 vto.), dado que, durante el proceso de liquidación del empresario la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha adoctrinado que no es viable imponer esta sanción, pues *“de imponerle la indemnización moratoria a un empleador que se encuentra en esas condiciones, es decir en liquidación obligatoria, no tendría razón de ser la expedición de las leyes especiales que permiten la intervención Estatal en las empresas, las cuales están destinadas a proteger no solo el capital y la inversión económica, sino también los intereses de los asalariados y por ende el derecho Constitucional al empleo consagrado en el artículo 25 del Ordenamiento Superior, que se orienta a que un agente estatal dirija los destinos de la unidad de explotación económica y pretenda ya la recuperación económica, ora la liquidación de la sociedad “*(ver sentencias SL2833 de 2017 y 20.764 del 10 de octubre de 2013); precedente que no puede desconocerse, dado que los casos resueltos presentan semejanza fáctica. En este tópico, la demandante sugiere el estudio de las conductas del Departamento de Antioquia, para hallar la mala fe, pero esto no es posible, debido a que el actuar que permite la imposición o no de este concepto, es el que haya dispuesto el empleador, esto es, Brilladora Esmeralda, al momento del finiquito contractual, y no el del posible deudor solidario, cuya responsabilidad no pende de elementos subjetivos (Ver sentencias SL175 de 2021, SL17473 de 2017, y la de radicado 37.936 del 3 de noviembre de 2010). De modo que, este aspecto también será confirmado.

Todos los emolumentos deberán ser indexados como bien se dispuso en la primera sentencia, dado que se trata de capitales que han perdido su poder adquisitivo, siendo adecuado que la corrección monetaria opere a partir del 25 de febrero de 2014, dado que la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST, cubrió los capitales hasta el día anterior a esa fecha.

De todas las condenas, es solidario el Departamento de Antioquia, ante el razonamiento de su responsabilidad en el suministro del servicio de aseo en las instituciones educativas, que fue desarrollado en párrafos precedentes, pues en ese escenario ocupó para el caso, el lugar de beneficiario del servicio, en los términos del artículo 34 del CST.

En síntesis, se confirmará la sentencia apelada y consultada, porque los reparos propuestos por la demandante no tuvieron eco en esta oportunidad, y en los aspectos revisados en el grado de consulta, se encontró la providencia acorde a las normas y jurisprudencia actuales.

Finalmente, siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP, al no salir adelante el recurso, costas a cargo de la demandante, se fijan como agencias en derecho en segunda instancia \$100.000. Sobre las agencias en derecho fijadas en primer grado y su posible aumento, como bien dijo la propia impugnante, este no es el escenario procesal previsto en las normas adjetivas, para su cuestionamiento (artículo 366 del CGP), motivo por el cual no se emitirá pronunciamiento alguno.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas, atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, se fijan como agencias en derecho \$100.000.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 117 fijados el 7 de julio de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.